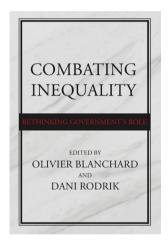
Olivier Blanchard y Dani Rodrik (Eds.) (2021). Combating Inequality. Rethinking Government's Role. The MIT Press, Massachusetts.

## Gabriel Alberto Rosas Sánchez<sup>1</sup>



sta obra académica editada por Olivier Blanchard y Dani Rodrik, cuya dedicatoria es para Alan Krueger- célebre economista estudioso de temas laborales y fallecido en marzo del 2019recopila 29 interesantes artículos dividido en 11 secciones. Nace de una serie de conferencias que tuvieron lugar en el Peterson Institute for International Economics durante octubre 2019, donde el eje central de las participaciones fue indagar las causas y consecuencias de la desigualdad, igual que las propuestas, herramientas y políticas para combatirla. Tal como señalan los autores en la parte introductoria, actualmente se cuenta con las herra-

mientas para reducir las brechas sociales: las políticas contra la desigualdad. Es así como se organiza el libro.

En la sección I se presentan los artículos de Lucas Chancel y Peter Diamond que dan cuenta del panorama general de la desigualdad. El primero de ellos detecta 10 hechos estilizados sobre la desigualdad, centrándose en Estados Unidos

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Doctorando de la Maestría y Doctorado en Ciencias Económicas de la UAM. Correo electrónico: rosassanchezgabriel@gmail.com

respecto a otras naciones desarrolladas: i) escasez de datos sobre desigualdad por edad; ii) la desigualdad de ingresos ha incrementado a velocidades diferenciadas durante los años 80´s para después declinar y ascender nuevamente; iii) las naciones se han vuelto más ricas y los gobiernos más pobres; iv) el capital está disponible para algunos; v) la gran recesión a causa de la crisis del 2008 no detuvo el incremento de la desigualdad; vi) la desigualdad se relaciona más con la clase que por la nacionalidad; vii) mayor desigualdad genera menos movilidad social; viii) las desigualdades por género y racial disminuyeron pero siguen en niveles altos; ix) buenos salarios, acceso a servicios de salud y educativo eleva los ingresos de quienes están en la parte baja de la distribución y x) un sistema tributario progresivo es clave para frenar la desigualdad en la parte superior. De manera concluyente el autor apunta que existe un margen amplio para mejorar la distribución y convertirla en más equitativa. La forma de lograrlo radica en el papel de las políticas e instituciones sobre el impulso educativo de calidad. Sobre todo, mitigar el papel disruptivo que provoca el desplazamiento laboral por innovaciones tecnológicas.

Complementando esta visión general, Peter Diamond en el capítulo 2 considera las aseveraciones de Chancel y desarrolla una serie de planteamientos que intenta mostrar las restricciones en la recaudación a las que se enfrenta un gobierno y que dificultan la ejecución de cualquier política. Retomando el hecho de que los gobiernos a nivel internacional se han empobrecido, señala que existen severos límites para financiar nuevas inversiones que incrementen la demanda laboral y sirvan como infraestructura de servicios públicos. Un aspecto relevante es la insistencia en consolidar buenos programas fiscales como elemento central contra la desigualdad, principalmente dentro de una coyuntura del cambio climático donde los sectores de bajos ingresos tienen menos posibilidades para adaptarse. Lograr este fin requiere elegir una adecuada fuente de financiamiento para impulsar el gasto público. Más que pensar en solamente implementar impuestos, debe debatirse el tipo y la manera en que se combinan estos con el gasto. De manera sincrónica, sería posible, señala el autor, maximizar el bienestar social siempre y cuando se hagan reformas a la seguridad social que protejan a la población

En la sección II, "Dimensiones éticas y filosóficas", se aborda un espacio poco común para los economistas. La influencia en la economía de las ideas desde la filosofía política desarrolladas por John Rawls, Phillip Pettit, Amartya Sen (este último reciente acreedor al premio Princesa de Asturias 2021), entre otros, tal como señala Danielle Allen en el capítulo 3, buscan replantear las relaciones entre los seres humanos, con su entorno y con el resto. Bajo este elemento, los economistas deberían considerar a cada persona desde su intencionalidad en lugar de su racionalidad. Es decir, los individuos buscan el mejor camino para su desarrollo en términos individuales y de participación política.

En este contexto, la igualdad no puede reducirse a compensaciones monetarias o impuestos progresivos sino a un conjunto de políticas e instituciones que busquen el cumplimiento de la intencionalidad humana. El autor propone medidas para reducir los bloqueos a los mercados laborales, el fomento a la educación cívica y ética en los planes de estudio, así como prácticas de gobernanza que dirija los esfuerzos de la economía hacia el cumplimiento de estos propósitos.

Siguiendo la misma temática, la contribución de Phillipe Van Parijs se enfoca en las desigualdades que deberían preocupar a los economistas, entre ellas el reconocimiento a los efectos de la desigualdad en la condición personal, como la autoestima y la dignidad. Asimismo, apunta la poca claridad que tienen los indicadores habituales utilizados para explicar la desigualdad. Por ejemplo, el ingreso por habitante únicamente considera el flujo instantáneo, pero no estima el ingreso que una persona podrá tener en su vejez, sesgando la medición en sociedades donde la mayor parte de personas son jóvenes.

De esta manera, se liga el texto de T. M. Scanlon donde se reafirma la importancia de la debatir la desigualdad en la arena pública. Así, la desigualdad debe considerarse objetable si resulta del hecho de que un individuo o institución que tiene la misma obligación de proporcionar un determinado beneficio a cada miembro de un grupo proporciona este beneficio a un nivel más alto para unos que para otros, sin una justificación especial. En efecto, la desigualdad no sólo debe cuestionarse por las consecuencias que genera sino, además, por los mecanismos institucionales que la producen.

Las dimensiones políticas de la desigualdad son debatidas en la sección III. Aquí se presenta un debate sugerente acerca de la forma en que la desigualdad puede influir en las preferencias políticas de los electores. Ben Ansell en el capítulo 6 establece una relación negativa, en el caso de Inglaterra, entre el precio de la vivienda y el apoyo a políticas en favor del empleo y la seguridad social. Es decir, familias que poseen hogares de alto precio son menos sensibles a programas de apoyo a las personas de menores ingresos, mientras que hogares humildes tienden a apoyar proyectos populistas.

Sheri Bernann en el capítulo subsecuente apunta que las políticas para combatir la desigualdad deberían estar presente en la mayoría de los votantes. Sin embargo, los partidos políticos se interesan en este tema siempre y cuando tengan incentivos para hacerlo. Éstos únicamente aparecen si los votantes dan prioridad a los temas y se movilizan sobre la base de ellos. La evidencia muestra que los partidos de derecha populista desviaron la atención sobre la desigualdad y prefirieron dirigir los problemas económicos hacia ciertos grupos como los inmigrantes

La falta de compromiso por reducir la desigualdad ha producido en Estados Unidos una polarización política. De acuerdo con el capítulo de Nolan McCarty, el país norteamericano la desigualdad ha incrementado desde finales del siglo XX hasta la fecha, a diferencia del resto de países desarrollados donde el nivel de desigualdad ha disminuido a pesar de estar en niveles altos, convirtiendo a la nación en una excepción. Esta dinámica ha provocado que los votantes con distintos niveles de ingreso tengan perspectivas diferentes acerca de la política pública y los apoyos sociales, generando así, apunta el autor, cierto tipo de parálisis política.

La sección IV, "La distribución del capital humano", muestra que el deterioro institucional de la seguridad social y de la educación de las personas que se sufre en Estados Unidos y a nivel internacional, son factores de vulnerabilidad que incrementan la desigualdad. Rothstein, Katz y Stynes en el capítulo 9 apuntan hacia la reconfiguración de una red de seguridad pública moderna basada en 4 principios: i) que todos los niños tengan acceso a los recursos para su desarrollo pleno, ii) reconocer como fundamental las condiciones de trabajo, iii) en caso de perder el puesto de trabajo existan mecanismos para evitar que sea una situación devastadora para las familias y iv) que aquellos que no puedan obtener un trabajo tengan una línea de seguridad. El mercado laboral ha dejado de funcionar adecuadamente para las últimas dos generaciones de seres humanos, razón por la cual el nuevo sistema de seguridad, en línea con los autores, requeriría un paquete que apoye a los padres con la manutención de los niños, créditos que complementen al salario, facilitar las condiciones económicas para el ingreso

de las madres solteras al mercado laboral, seguros de desempleo y el apoyo de instituciones de última instancia para quienes no tienen trabajo.

Uno de los factores que engrandece las brechas de desigualdad es la calidad de la educación. Por ello, Tharman Shanmugaratnam señala que, a pesar del esfuerzo educativo de los jóvenes, no se tiene certeza que el mercado laboral pueda retribuirlo. Esto se puede atribuir principalmente a la falta de adaptación de la educación a los tiempos de cambio que implica conocimientos sobre la robotización y las nuevas industrias tecnológicas. Al mismo tiempo, se ha desatendido la educación primaria que va de los o a los 3 años en donde se desarrollan habilidades tempranas, existe ineficiencias en la educación universitaria, sobre todo falta de actualización y capacitación constante de los trabajadores empleados, a diferencia de países como Alemania donde existen esquemas de aprendizaje constantes de los empleados, como se explicará más adelante. El economista de Singapur insiste en reorientar el aprendizaje hacia aprendizaje aplicado, descubrir y desarrollar capacidades tecnológicas, para lo cual se requiere esfuerzo tripartita: empresas, universidades y gobierno.

La reconfiguración de las cadenas globales de valor tiene como protagonista a las naciones asiáticas, particularmente China. Su incorporación en los mercados mundiales es fuente de múltiples cambios en las estructuras productivas. Por esta razón, el apartado V analiza los impactos del crecimiento manufacturero chino sobre los mercados laborales estadunidenses y el bienestar social.

David Autor menciona que las autoridades estadunidenses no fueron capaces de prever el desplazamiento de China en el mercado mundial; pero esa no es la causa de las dificultades del sector laboral estadunidense en los últimos tiempos. El autor apunta un severo deterioro de los ingresos de trabajadores estadunidenses que no poseen estudios universitarios; débil convergencia, en términos de ingresos, de las distintas regiones del país, y una brecha creciente entre los trabajadores universitarios y sin educación superior. Si bien el desplazamiento de las inversiones a países con menores costos laborales es un hecho imposible de contener, la aparición de China aceleró esta tendencia. Aun así, los problemas descritos no fueron causados por esta dinámica, únicamente fueron evidenciados.

En respuesta a los posibles efectos adversos del impacto chino en términos de balanza comercial y sus implicaciones en los mercados laborales, Christian Dustmann en el capítulo 12 presenta las lecciones que Estados Unidos -y el mundo-puede aprender para mantener una posición competitiva frente al gigante asiático. El economista inglés apunta que el comercio con China no ha sido identificado como un factor negativo para Alemania. Por el contrario, los trabajadores alemanes se vieron beneficiados de la demanda china gracias a su especialización en bienes que consumen los nacientes segmentos de altos ingresos.

Otros aspectos que explican el éxito alemán no sólo se deben a su capacidad de exportación, sino también a las relaciones construidas entre trabajadores, sindicatos y empresas que permite a los trabajadores, como ya se señaló, una capacitación constante y de vanguardia con el fin de conservar altos niveles de competencia internacional. Esto es posible gracias a la buena formación universitaria y por las habilidades adquiridas del sistema de formación de aprendices alemanes. Aunado a ello, el papel de los sindicatos como mediador permite elevar el costo de despido y evitar una fácil sustitución por maquinas.

La mayoría de los países en el mundo no han sabido adaptarse a los cambios producidos por China, provocando que los trabajadores vean deterioradas sus condiciones de vida e incrementando así la desigualdad. Esta evidencia lleva Caroline Freund, en el capítulo que complementa esta sección, a declarar que deben repensarse las políticas que llevan a cabo las naciones para reducir la desigualdad. Particularmente, Freund insta al impulso de la educación con el fin de tener trabajadores más capacitados a los retos que implica el progreso tecnológico y la automatización dentro de un entorno de protección social. El actual diseño del sistema laboral ha excluido a muchos trabajadores que simplemente se quedaron atrás y sufren los estragos de la desigualdad.

La sección VI, "La (re) distribución del capital financiero", es quizás el apartado que genera más debate entre las posturas de los autores que integran el libro acerca del ingreso universal y el impuesto al patrimonio. El artículo que apertura el apartado es de Gregory Mankiw quien plantea una postura ciertamente controversial en el debate público al señalar que no todos los ricos son iguales y en cambio se les tiende a valorar negativamente en general. El célebre economista no está convencido que sean este segmento de la sociedad objeto de la redistribución vía impuesto directo a sus fortunas, sino que existen métodos distintos para lograr la redistribución. Señala que es injusto que las grandes fortunas que generan externalidades positivas, como la creación de empresas, sean igualmente sometidas al pago de impuestos que fortunas cuyos dueños dedican a gastos de bienes suntuarios. Este tipo de medidas impulsadas por Elizabeth Warren y Bernie Sanders, reduciría los efectos positivos de las inversiones productivas. En cambio, propone la implementación de un impuesto eficiente al valor agregado que sean distribuido en forma de un ingreso básico universal a los más necesitados. Igualmente, se considera un impuesto a las emisiones de carbono como fuente de financiamiento. Concluye Mankiw que los impuestos a las fortunas no garantizan la redistribución del ingreso y existirían mecanismos con mavor eficiencia económica.

En una visión opuesta, Emmanuel Saez en el capítulo 16 destaca que debería impulsarse la propuesta de Warren acerca de un impuesto sobre el patrimonio. Dicha medida permitiría recaudar mayores ingresos de los ricos, restablecer la progresividad de los impuestos y frenar la creciente desigualdad de la riqueza, con lo cual podría recaudarse el 1% del PIB cada año. Dentro de sus mediciones, plantea un escenario donde la tasa de evasión fiscal corresponde al 15% y las tasas de retorno de la riqueza está subestimado. De acuerdo con el autor, aplicar este impuesto es considerado un acto riesgoso pues recortaría los incentivos a la innovación e inversión productiva, acompañado de reducciones en las existencias del capital. Sin embargo, un impuesto sobre el patrimonio es una herramienta potencialmente más poderosa que los impuestos sobre la renta.

Un crítico a las estimaciones obtenidas por Saez es Lawrence Summers, quien tiene severas discrepancias acerca del potencial del impuesto al patrimonio. Señala de exagerado los argumentos acerca de la erosión del sistema fiscal estadunidense, la tasa de evasión, el nivel de ingresos de la muestra seleccionada y la progresividad fiscal. Además, señala que la creación de otro tipo de impuestos para incrementar la recaudación impulsaría la participación de los ricos en la sociedad. En contraparte, apunta que existen enfoques alternativos para recaudación progresiva de ingresos que sean más factibles, más confiables, que generen más ingresos y sean más coherente con la eficiencia económica. Un impuesto al patrimonio dispararía el número de transferencias a organizaciones filantrópicas y tendría una gran resistencia política.

El apartado VIII plantea una perspectiva actual respecto a los cambios en los patrones tecnológicos y su vínculo con la desigualdad. En este plano, Daron Acemoğlu describe acertadamente los impactos de la acelerada robotización sobre la participación de la mano de obra en el producto nacional. Las empresas en búsqueda de incrementar la productividad desplazan miles de plazas de trabajo por maquinas, siendo los trabajadores menos capacitados los más vulnerables por su falta de adaptación. Para explicar esta tendencia, el economista de origen turco atañe a la ausencia del Estado en la creación de innovaciones que permita coexistir diferentes patrones tecnológicos y trabajadores con calificaciones distintas. Las grandes empresas han conducido la "frontera de posibilidades de innovación" hacia un paradigma dominante que desplaza a trabajadores que no poseen las cualidades necesarias. La innovación debe ser en todo momento un acto de amplio consenso.

Complementariamente, Phillipe Aghion afirma que se abusa de los beneficios de la tecnología al pensarse como elemento inherente al incremento de la productividad y factor de movilidad social pues los nuevos nichos tecnológicos son aprovechados por empresarios innovadores. En cambio, con base en el índice de Gini, describe una relación entre la innovación y la desigualdad. Es decir, las empresas tecnológicas que dominan el paradigma tecnológico actual basado en las tecnologías de la información como Facebook, Apple, etc., incrementan sus ingresos de manera desproporcional a la pirámide mientras obtienen mayor poder de cabildeo para proteger -vía legal- sus rentas tecnológicas.

Frente a las complicaciones laborales que ha provocado el cambio tecnológico, Laura Tyson en el capítulo 19 señala que el régimen fiscal impulsó la sustitución de trabajadores por maquinas debido a los bajos o nulos impuestos que fomentan el uso de nuevas tecnologías. Además, la política de innovación retorna las ganancias hacia el capital en lugar de incrementar los beneficios sociales. La autora promueve el cambio políticas en busca de buenos trabajos y protección a los trabajadores, busca fortalecer a los sindicatos como espacio de empoderamiento de los trabajadores y protección de su salario, mejorar el modelo educativo enfocado a las necesidades de la nueva especialización y contar con capacitaciones constantes de los empleados, coincidiendo plenamente con lo planteado por Dustmann. Las deficiencias de los mercados laborales reflejan las vulnerabilidades a las que se enfrentan los trabajadores, la precarización de sus condiciones de empleo y la brecha creciente en términos de ingreso. A pesar de ello, las mujeres son quienes sufren mayormente los estragos.

La sección VIII, gracias al capítulo de Marianne Bertrand, cavila sobre las consecuencias económicas de la desigualdad para las mujeres. A pesar de que los datos a nivel internacional muestran que la brecha de género se viene cerrado, ésta sigue siendo alta y oculta muchos problemas. Particularmente, las trayectorias de ingresos de las mujeres posterior a su primer hijo sufren una divergencia clara; es decir, sus ingresos caen drásticamente. Junto a ello, la evidencia muestra que las mujeres reducen su participación laboral por cuidar a sus hijos y con ello sus ingresos, aunado a las dificultades para realizar viajes de trabajo por los hijos. Una forma de reducir estas manifestaciones de la desigualdad, la economista de la Universidad de Chicago pugna por eliminar los estereotipos que la sociedad machista atribuye a las mujeres, particularmente a no impulsarlas a estudiar ciencias exactas como matemáticas por considerarlas difíciles para ellas.

Para que las mujeres y el resto de los trabajadores puedan fortalecer su voz y exigencias, el capítulo 21 de Richard Freeman puntualiza en reformas que permitan a los trabajadores organizarse y negociar colectivamente. El autor propone dos vías. La primera consiste en el fortalecimiento de los sindicatos por parte del gobierno y la fijación de salarios de manera centralizada con el fin de reducir el poder del empleador. Así, los trabajadores obtendrían poder para discutir acerca de temas laborales. La segunda propuesta es crear alguna instancia que permita a los trabajadores poseer una proporción de las empresas, específicamente la propiedad sobre cierto número de acciones bursátiles. Como resultado, los trabajadores tendrían un ingreso adicional por la venta de estos activos y mejoraría su productividad.

Continuando con la desigualdad laboral, tema de vital importancia en el libro, la sección IX está dedicada a las herramientas del mercado laboral que podrían ayudar a reducir los problemas. William Darity denuncia el fin del sueño americano donde el hijo ganaría más que los padres. Para salir de esta condición, tendría que garantizarse un trabajo bien remunerado que permita adquirir comida, ropa y recreación. En lugar de un sistema de ingreso básico universal, el autor señala la viabilidad de programas de largo alcance. Una garantía federal de empleo, propuesta del autor, requiere de personas encargadas de cuidar a niños y ancianos mientras los integrantes de la familia salen a trabajar **vía** contratación de trabajadores por parte del gobierno, de acuerdo con los ciclos

económicos. El costo rondaría en 2 mil millones de dólares y garantizaría la inclusión de personas a las que por cuestión de género, sexo o religión se les han cerrado las puertas.

En sintonía, David Ellwood exhorta a que el trabajo sea rentable para combatir desigualdad. Al igual que Darity y previamente a Summers, se posiciona en contra del ingreso básico. Lo ideal sería generar condiciones rentables de trabajo vía incremento del salario mínimo, cuidado de niños, licencia por maternidad, licencia por enfermedad, atención médica y pensiones. Al tiempo que Heidi Shierholz en el capítulo 24 apunta que, para alcanzar la equidad laboral, debe evitarse antes violaciones al contrato laboral, robo de salarios, horas extras, deducciones ilegales y robo de propinas de trabajadores empleados en el sector servicios. El fortalecimiento de los sindicatos es clave para evitar dichas acciones.

La sección X gira alrededor de la seguridad social como elemento crucial para alcanzar la igualdad. Jason Furman justifica que la pobreza es incluso mayor que la reportada porque se calcula antes del pago de impuestos. Inclusive las transferencias pierden su potencial si se descuenta los impuestos. Una forma de compensarlo sería a partir de los programas sociales como mecanismos estabilizadores, particularmente los servicios médicos. El presente y futuro exigen una red de seguridad que pueda ayudar a reducir la pobreza y desigualdad.

Hilary Hoynes, por su parte se preocupa particularmente de la pobreza infantil, que en Estados Unidos es el grupo con el nivel de pobreza más alto. Propone dos medidas para revertirlo, particularmente ampliar el crédito fiscal, incrementar el salario mínimo, vales de despensa, manutención por hijo y evitar la separación de familias por causa de políticas de migración. En su ejercicio de simulación, la pobreza infantil disminuiría entre 50 y 51 %. En el largo plazo, el gasto de la red de seguridad social en niños generaría buenos resultados en el capital humano y salud de los futuros adultos.

En el apartado final del libro, "fiscalidad regresiva", se da un importante debate acerca del papel de las políticas de tributación sobre la desigualdad. Wojciech Kopczuk teoriza sobre el tipo de financiamiento que requiere el gobierno para la implementación de políticas. El economista polaco muestra cierta escepticismo sobre el impuesto al patrimonio debido a los problemas que pueda traer en la esfera empresarial, el surgimiento de nuevas oportunidades para la evasión y la posibilidad de corregir los impuestos actuales sobre donaciones y herencias.

Luego entonces, se decanta por impuestos sobre nómina y al valor agregado junto a una reforma que incremente la eficiencia de los impuestos existentes.

En el capítulo 28 Stefanie Stantcheva está convencida de que la desigualdad es un problema que debilita la democracia estadunidense, por lo que, para aplicar políticas de distribución, es necesario escuchar a la gente y una buena herramienta para hacerlo son las encuestas. Estas reflejan el sentir popular sobre la falta de confianza en el gobierno para comandar las políticas mitigadoras de la desigualdad, pues las personas lo consideran **cómplice de la actual situación**, al tiempo que expone la manera en que la gente piensa a ciertos grupos, como los inmigrantes, causantes de la desigualdad. Las encuestas deben convertirse en instrumentos que permitan al ciudadano informarse sobre la desigualdad y transmitirle los impactos sobre sus familias. Mientras, los economistas deberían brindar a los ciudadanos mejores herramientas para comprender las políticas y puedan tomar decisiones informadas.

El último artículo del libro escrito por Gabriel Zucman justamente se coloca contra aquellos autores que no están de acuerdo con el impuesto al patrimonio. Desde su perspectiva, es necesario corregir los problemas que se presentaron en su implementación en Europa, por ejemplo, la falta de unanimidad de todos los estados miembros, la existencia de paraísos fiscales tanto como los vacíos legales que provocan deducciones y exenciones.

Como pudo observarse con los autores anteriormente citados y que muestran su apoyo a otros tipos de impuestos para mejorar la distribución, el autor señala que los impuestos sobre la renta y las ganancias de las empresas transnacionales sería un paso importante en el incremento de la progresividad del sistema fiscal pero no son suficientes para poner límites a las fortunas multimillonarias, más en un país donde la riqueza del 1% de población representa el 40% del total.

Este libro es una invitación a todo el público, especialistas, académicos y políticos a profundizar sobre el problema de la desigualdad. Las autoras y los autores, en un trabajo muy bien documentado en términos estadísticos, dejaron claras las implicaciones para el bienestar, desarrollo humano y progreso social. La revisión muestra que los trabajadores se encuentran en condiciones laborales cada vez más precarias, sin seguridad social ni sistema de pensiones al tiempo que son vulnerables a perder su empleo por el acelerado proceso de automatización que implica el paradigma tecnológico actual, al tiempo que sus efectos se profundizan cuando se trata de mujeres, niños e inmigrantes. La desesperanza sobre la actualidad se convierte en presa de intereses políticos quienes ofrecen respuestas fáciles a problemas complejos, pero simplemente continúan profundizando los caminos de la desigualdad.

Las propuestas del libro apuntan hacia el replanteamiento de las políticas públicas y el papel del gobierno para reducir las brechas sociales actuales. En este sendero, pueden identificarse dos posturas. Aquellos que consideran que el actual sistema fiscal puede lograr estos objetivos y sólo falta volver eficientes los mecanismos existentes y aquellos que apoyan la revolución tributaria que otorgue ingresos básicos universales a los más necesitados y recaude impuestos hacia las riquezas y patrimonio de los multimillonarios. Ambas posturas cuentan con el sustento técnico para validar su potencial.

Más allá de resolver la mejor opción acerca del rumbo del sistema fiscal en el mundo (aunque moralmente y con argumentos **técnicos sólidos** los impuestos a la riqueza parecen tomar auge en la arena pública), es evidente que el libro deja un vacío al no cuestionar las fuentes de la desigualdad. En la repartición de culpas no se cuestiona adecuadamente el papel de las empresas y los intereses corporativos de quienes, en búsqueda de la ganancia productiva y rentas financieras, someten leyes, gobiernos, democracias y cualquier resistencia social con tal de lograr sus cometidos.

Son adecuadas las propuestas para contribuir a la solución a los problemas de la desigualdad, como la construcción de sistemas de salud, mejoras en el sistema educativo desde el nivel básico hasta universitario, capacitación constante a los empleadores, ingreso básico, apoyo a las mujeres con gastos de manutención y guarderías. Sin embargo, existe el inconveniente que la gran mayoría de estados nacionales sufren de la falta de recursos económicos en una coyuntura donde la pandemia exige canalizar el esfuerzo principalmente hacia la compra de vacunas y funcionamiento de hospitales, aunado a una coyuntura histórica que desde los años 80´s se redujo sistemáticamente el tamaño y funciones del Estado. Esto resulta una paradoja, se necesita más Estado cuando el mismo Estado está débil, fragmentado y sin recursos.